



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 61541/2022/1/CA1, Legajo N° 1 - DENUNCIADO:
ACEVEDO , CESAR ALBERTO s/LEGAJO DE
APELACION, (Juzgado Federal N° 2 de Morón, Secretaría
N° 7).

Registro de Cámara: 13.914

San Martín, 06 de marzo de 2024.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón contra el auto mediante el cual se resolvió sobreseer a Cesar Alberto Acevedo, en orden al delito de evasión tributaria, previsto y reprimido por el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

II. Para así resolver, el magistrado de grado entendió que, si bien Cesar Alberto Acevedo no realizó la cancelación de la deuda con el fisco en el plazo previsto en el Art. 16 de la ley 27.430, lo cierto es que, no solo abonó lo reclamado, sino que lo hizo por la totalidad de su deuda con el ente recaudador, demostrando así su intención de cumplir con la ley. Además, el mismo día que se notificó de la formación de la causa refirió que se iba a presentar en AFIP y abonar la deuda, situación esta última que ocurrió más tarde.

III. Por su parte, al fundamentar el remedio procesal interpuesto, el recurrente esgrimió que no se encuentra en crisis que el contribuyente ha excedido el plazo de 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se lo notificó fehacientemente acerca de la imputación que se le formuló, pues ello surge de la misma resolución atacada, así como también de las constancias obrantes en el expediente, por lo que no se ha cumplido uno de los requisitos establecidos en la ley para hacer aplicación de dicho instituto y, en consecuencia, la acción penal se encuentra vigente.

IV. Liminarmente, toca indicar que la actual redacción de la ley 27.430 establece, en su artículo 16, la extinción de la acción penal por pago “si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula”; ello, en relación a las figuras delictivas indicadas en los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6 del régimen penal tributario.



La norma resulta clara y no ofrece mayores dificultades. Esto es, se requiere la aceptación y cancelación en forma incondicional y total de las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorias, dentro del plazo allí establecido.

No es ocioso recordar que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de valoración debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado por la norma. De otro modo, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la interpretación legal, equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 312:2079).

Así, la aceptación de la pretensión fiscal y su cancelación, dentro del plazo previsto por la norma, constituyen la esencia que nutre esta particular expresión del principio de oportunidad. Esto es, al verse disminuida la afectación del bien tutelado tras el ingreso a las arcas del Estado de los montos evadidos al fisco en su totalidad, se prescinde del ejercicio de la acción penal al respecto, con sustento en razones de política legislativa.

V. Puesto a decidir sobre el objeto en debate, cabe recordar que el 17 de abril de 2023, compareció ante el juez instructor Cesar Alberto Acevedo, ocasión en que se dejó constancia de su notificación de la formación de la causa –acorde con lo normado en el artículo 73 del C.P.P.N. y de las previsiones del artículo 279 del C.P.P.N.; se le hizo saber de su derecho a negarse a declarar sin que ello implique presunción alguna de culpabilidad en su contra, como a ser asistido por un profesional de la matrícula (arts. 104 y 105 del C.P.P.N.) y, en su defecto, por el Sr. Defensor Oficial, pudiendo mantener una entrevista con su defensa antes de declarar.

Ante ello, el compareciente manifestó que no deseaba prestar declaración espontánea, que solamente presentaría la documentación del ejercicio fiscal 2017, y refirió que iría a la AFIP a cancelar toda la deuda y aportaría el comprobante. Finalmente, agregó que por el momento proponía como letrado defensor al Defensor Oficial que por turno corresponda.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 61541/2022/1/CA1, Legajo N° 1 - DENUNCIADO:
ACEVEDO , CESAR ALBERTO s/LEGAJO DE
APELACION, (Juzgado Federal N° 2 de Morón, Secretaría
N° 7).

Registro de Cámara: 13.914

Al día siguiente, el nocente compareció nuevamente a la sede judicial, a los efectos de aportar un comprobante de acogimiento a un plan de pagos -8 cuotas-, por la totalidad de las deudas que recaían sobre él, refiriendo que el sistema no le permitió saldar la deuda en una única cuota.

Atento a ello, el 19 de abril de 2023, el juez instructor ordenó hacerle saber lo prescripto en el Art. 16 del Régimen Penal Tributario. El 27 de abril de ese mismo año, su defensa solicitó la suspensión de la acción penal hasta tanto se encuentre saldada la deuda mediante el plan de pagos, a los efectos de posibilitar la aplicación de la norma citada, por entender que se encontraba en “instancia de pago.

Corrida que fuera la vista al representante de la vindicta pública -28 de abril de 2023-, el 31 de mayo de ese mismo año, ese ministerio se expidió oponiéndose a la suspensión, por entender que el plan de pagos al que se acogió el contribuyente, excedía los 30 días hábiles previstos por la norma.

Ante tal panorama, el 6 de julio de 2023, el juzgado requirió a la AFIP que informe si el plan de pagos podía ser cancelado en una única cuota, respondiendo el órgano administrador –luego de haber sido reiterada la petición por el juzgado-, con fecha 29 de agosto, que para cancelar un plan en forma anticipada se debía esperar hasta el vencimiento de la segunda cuota y, a partir de ese momento, hacer la solicitud para finalmente cancelar el total de lo adeudado al mes siguiente. Esto fue notificado a la defensa, el 30 de agosto.

Así, el 6 de septiembre de 2023, la defensa hizo saber que su representado ya había solicitado la cancelación adelantada del plan de pago, encontrándose pendiente la respuesta del ente recaudador, para finalmente aportar los comprobantes que dan cuenta del pago total de la deuda en los días 12/10/2023 y 1/11/2023, información que fue ratificada posteriormente por la AFIP.

En tales condiciones y en atención a las particulares circunstancias del caso, debe valorarse a favor del contribuyente la realización de actos concretos e inequívocos tendientes a la cancelación total e incondicional de su deuda, en los términos del Art. 16 del Régimen Penal Tributario, al tiempo que no pueden pesar en su contra las dilaciones, tanto de la Administración como del Ministerio Público



Fiscal y la judicatura, para dar respuesta a la solicitud de suspensión interpuesta, más aún, cuando apenas se notificó a la defensa lo informado por la AFIP, el encausado solicitó la cancelación anticipada ante ese organismo, conforme se desprende de las constancias incorporadas al legajo.

En razón de lo expuesto, analizadas en su conjunto las piezas obrantes en el expediente, corresponde concluir -en el caso particular- que los actos del imputado, en todo momento se direccionaron en el sentido exigido por la norma, cancelando las obligaciones evadidas y sus accesorias. De este modo, a pesar del exceso del plazo administrativo de 30 días hábiles, el auto recurrido habrá de homologarse.

Por ello, el Tribunal **RESUELVE:**

CONFIRMAR por los fundamentos expuestos en la presente, la resolución apelada en todo cuanto fuera materia de recurso.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y Ley 26.856) y devuélvase digitalmente mediante el sistema Lex100.-

—

JUAN PABLO SALAS
JUEZ DE CAMARA

MARCOS MORAN
JUEZ DE CAMARA

MARCELO DARIO FERNANDEZ
JUEZ DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 61541/2022/1/CA1, Legajo N° 1 - DENUNCIADO:
ACEVEDO , CESAR ALBERTO s/LEGAJO DE
APELACION, (Juzgado Federal N° 2 de Morón, Secretaría
N° 7).
Registro de Cámara: 13.914

MARIA ALEJANDRA LORENZ
PROSECRETARIO DE CAMARA

